



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SCM-JIN-93/2021

ACTOR: FUERZA POR MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: 10
CONSEJO DISTRITAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADO: HÉCTOR ROMERO
BOLAÑOS

SECRETARIAS: MARÍA DE LOS
ÁNGELES VERA OLVERA Y PAOLA
PÉREZ BRAVO LANZ

Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veintiuno.¹

La Sala Regional Ciudad de México, en sesión pública de la fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de **confirmar** los actos impugnados.

GLOSARIO

Actor o partido	Fuerza por México
Autoridad responsable o Consejo Distrital	10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Distrito	10 Distrito Electoral Federal en la Ciudad de México
INE o Instituto	Instituto Nacional Electoral
Ley Electoral	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley de Medios	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
PVEM	Partido Verde Ecologista de México
Tribunal Electoral o TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

¹ En los sucesivos las fechas corresponden a dos mil veintiuno, salvo precisión en contrario.

ANTECEDENTES

De lo expuesto por el actor en su demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes antecedentes:

I. Jornada electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la elección de Diputaciones Federales al Congreso de la Unión.

II. Cómputo distrital. El nueve de junio, el Consejo Distrital inició el cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, determinando que la votación final obtenida por las y los contendientes resultó conforme a lo siguiente:

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LAS CANDIDATURAS		
PARTIDO O COALICIÓN	NÚMERO DE VOTOS	NÚMERO DE VOTOS (LETRA)
 VA POR MÉXICO	110,891	CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO
 JUNTOS HACEMOS HISTORIA	68,399	SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
 MOVIMIENTO CIUDADANO	9,080	NUEVE MIL OCHENTA
 PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO	1,726	MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS
 REDES SOCIALES PROGRESISTAS	1,049	MIL CUARENTA Y NUEVE
 FUERZA POR MÉXICO	2,227	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
CANDIDATURAS NO REGISTRADAS	198	CIENTO NOVENTA Y OCHO
VOTOS NULOS	3,631	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO
VOTACIÓN TOTAL	197,201	CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UNO

Así, al finalizar la sesión del cómputo distrital el diez de junio, el Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputaciones federales por ambos principios, así como la elegibilidad de la candidatura que obtuvo la mayoría de los votos y, en consecuencia,



expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula que resultó ganadora.

III. Juicio de inconformidad.

1. Presentación de demanda. El catorce de junio, el actor presentó ante la autoridad responsable, el escrito de demanda signado por el presidente interino del Comité Directivo Estatal del partido en la Ciudad de México, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales, y, por tanto, la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría respectivas.²

2. Remisión del expediente. Mediante oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el diecinueve de junio, el Consejo Distrital remitió la demanda, el informe circunstanciado y demás constancias que estimó pertinentes.

3. Turno. Recibidas las constancias respectivas, por acuerdo de esa misma fecha, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó la integración del expediente **SCM-JIN-93/2021**, y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley de Medios.

4. Radicación. Mediante acuerdo de veintidós de junio, el Magistrado instructor acordó la radicación del expediente en la ponencia a su cargo.

5. Admisión y cierre de instrucción. Mediante proveído de ocho de julio, se admitió la demanda; asimismo al no existir diligencias

² Según se desprende del sello estampado en la demanda, visible a foja 6 del expediente.

pendientes por desahogar, en su oportunidad, se cerró la instrucción en el juicio, quedando en estado de resolución.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un juicio de inconformidad promovido durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, celebrada en el Distrito con cabecera en Álvaro Obregón, Ciudad de México; supuesto normativo que es competencia de esta Sala Regional y ámbito territorial respecto del cual ejerce jurisdicción. Lo anterior con fundamento en:

Constitución. Artículos 41, párrafo tercero, base VI, 60, párrafo segundo, 99, párrafo cuarto, fracción I.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículos 1, fracción II, 164, 165, 166, fracción I, 173 y 176, fracción II.

Ley de Medios. Artículos 3, numeral 2, inciso b), 4, 6, 34, numeral 2, inciso a), 49, y 53, numeral 1, inciso b), en relación con el 50, numeral 1, incisos b) y c).

Acuerdo INE/CG329/2017.³ Por el que se aprobó la demarcación territorial de los trescientos (300) distritos electorales federales uninominales en que se divide el país.

SEGUNDO. Requisitos de procedencia.

Previo al estudio de fondo del presente asunto, este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9 numeral 1, 52 numeral 1, 54 numeral 1 inciso a), y 55 numeral 1 inciso b), de la Ley de Medios.

³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.



1. Requisitos generales.

a) Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella, se hace constar la denominación de la parte actora, así como el nombre y firma de quien acude en su representación; el domicilio para recibir notificaciones; se mencionan los actos impugnados, los hechos, agravios o motivos de perjuicio y los preceptos presuntamente violados.

Respecto a la firma, se precisa que, si bien el escrito de demanda no la contiene, el de presentación del juicio sí cuenta con ella, por lo que, se tiene por cumplido el requisito, en términos de la jurisprudencia 1/99⁴ de la Sala Superior, de rubro **FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO.**

Conforme a dicha jurisprudencia, cuando en el escrito de demanda por el que se promueve un medio impugnativo, no conste la firma autógrafa del promovente, pero el documento de presentación (escrito introductorio) sí se encuentra debidamente signado por el promovente, debe tenerse por satisfecho el requisito previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso g) de la Ley de Medios, ya que de éste se desprende claramente la voluntad del accionante de combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, **pues ambos escritos deben considerarse como una unidad a través de la cual se promueve un medio de impugnación.**

⁴ Consultable en Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 3, Año 2000, página 16.

b) Oportunidad. La demanda se presentó en tiempo, en tanto que se interpuso dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputaciones que se controvierte, de conformidad con el artículo 55 numeral 1 inciso b), de la Ley de Medios; esto es, el plazo comenzó el once de junio y concluyó el catorce siguiente y la demanda se presentó el trece de ese mes, por lo que es oportuna.

Lo anterior, se desprende de las constancias que obran en autos, tales como el informe circunstanciado y el acta de la sesión de cómputo distrital de la elección de diputación federal por mayoría relativa correspondiente al Distrito, en relación con el acuse de recepción que aparece en la demanda.

c) Legitimación y personería. La parte actora se encuentra legitimada para el presente juicio de inconformidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 numeral 1 inciso a), de la Ley de Medios.

Asimismo, se tiene reconocida la personería a Jaime Ochoa Amorós, en su carácter de presidente interino del Comité Estatal del Partido en la Ciudad de México, promoviendo el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 numeral 1 inciso a) fracción III, del señalado ordenamiento, en relación con los diversos 109 fracción II, 125 fracción X, de los Estatutos, en razón de que son los que se encuentran facultados para representar al partido.

Ello, porque los referidos preceptos disponen que los comités directivos estatales son órganos de dirección y representación del partido dentro de su ámbito territorial y, en cuanto a su presidencia, que es la persona representante legal del partido en su ámbito territorial.

En consecuencia, puede promover el juicio de inconformidad en virtud de ser la persona facultada para ello según los estatutos.



Asimismo, su nombramiento se acredita con el original de la certificación del registro de su nombramiento en el libro correspondiente, signada por la Directora del Secretariado del INE, que remitió en desahogo al requerimiento que se le formulara en el diverso juicio de inconformidad SCM-JIN-100/2021, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios⁵.

2. Requisitos especiales.

El escrito de demanda mediante el cual se promueve el presente juicio de inconformidad satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52 numeral 1, de la Ley de Medios.

a) Tipo de elección e individualización del acta de cómputo distrital. El Partido encauza su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa, así como de representación proporcional; la declaración de validez de la elección; así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas, realizados por el Consejo Distrital.

b) Casillas. En la referida demanda se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia de este juicio, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

⁵ Así como en la tesis P. IX/2004, de rubro **HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIX, abril de 2004, página 259, que resulta orientadora en el presente caso.

TERCERO. Cuestión previa y metodología.

1. Cuestión previa

Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23 numeral 1, de la Ley de Medios, esta autoridad se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos, de ahí, que esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Como ya se dijo, el actor estima que en el caso se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como la nulidad de la elección, previstas en el artículo 75 numeral 1, de la Ley de Medios, por lo que debe determinarse si se acreditan o no las irregularidades que invoca.

2. Metodología

Se presentará una síntesis de cada agravio y a continuación su respectivo estudio; lo que no causa afectación jurídica alguna, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia **4/2000**,⁶ de rubro **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.**

CUARTO. Estudio de fondo

1. Solicitud de recuento

⁶ Consultable en: Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 4, Año 2001, páginas 5 y 6.



a. Planteamiento

En el escrito de demanda, el Partido plantea, de forma aislada, la solicitud de recuento total de votos ante esta Sala Regional, aduciendo que su representante lo solicitó al Consejo Distrital responsable, pero **le fue negado**

De igual forma sostiene que durante el recuento de los paquetes cuya apertura permitió dicho Consejo Distrital, tanto su representante como las personas auxiliares que tuvo en las mesas de trabajo advirtieron que **se realizaron inscripciones o alteraciones a un número indeterminado de boletas** en las que se advertía el voto en su favor, para considerarlas como nulas.

Finalmente afirma que durante el cómputo distrital se presentaron **diversas irregularidades e inconsistencias** entre los resultados consignados en las Actas de casilla y los resultados electorales preliminares (PREP), que generan duda fundada y razonable respecto del resultado de la elección.

b. Estudio

En principio, debe señalarse que, ante tal solicitud, lo ordinario sería que este órgano jurisdiccional ordenara la apertura del incidente de nuevo escrutinio y cómputo, en términos de lo previsto en el artículo 21 Bis, de la Ley de Medios.⁷

⁷ Artículo 21 Bis

1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral solamente procederá cuando:

a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente en los términos de lo dispuesto por el artículo 295, párrafo 2 y demás correlativos del Capítulo Tercero del Título Cuarto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo escrutinio y cómputo por los órganos competentes o previéndolas se haya negado sin causa justificada el recuento.

SCM-JIN-93/2021

Sin embargo, en el caso, se estima que a ningún fin práctico conduciría realizar ese procedimiento, porque al tratarse de una solicitud genérica del partido actor, resultaría a todas luces **improcedente**.

Ello, porque al margen de la solicitud, el Partido no expone algún argumento encaminado a evidenciar que, en el caso concreto de la elección que impugna se actualizaba alguno de los supuestos de recuento, parcial o total, previstos en el numeral 311 de Ley Electoral, los cuales se resumen en los apartados siguientes:

- a. **Recuento parcial**, en alguna o algunas casillas en las cuales los resultados de las actas no coinciden; se detecten alteraciones evidentes en las actas; no exista acta de escrutinio y cómputo en el expediente de casilla; no obre el acta en poder de la presidencia del consejo; ante la existencia de errores evidentes en las referidas actas; el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre las candidaturas ubicadas en el primero y segundo lugares en votación; y cuando todos los votos hayan sido emitidos a favor de un mismo partido.
- b. **Recuento total**, que implica realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas, cuando exista indicio de que la diferencia de votos entre la candidatura presuntamente ganadora y quien haya obtenido el segundo lugar, es igual o menor a un punto porcentual, siempre y cuando se solicite al inicio de la sesión de cómputo; o si al término del cómputo se establece que la diferencia entre la candidatura presuntamente ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe petición expresa.

2. Las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias Salas sin necesidad de recontar los votos.

3. No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.



De manera que, si el Partido actor no aporta razones y elementos ante esta Sala Regional que actualicen los supuestos mencionados, resulta evidente que la solicitud planteada no podría prosperar al resultar genérica, imprecisa y aislada.

En esta línea resulta necesario mencionar que existen **requisitos especiales de procedencia** del juicio de inconformidad, previstos en el artículo 52 de la Ley de Medios, entre los que destacan **señalar la elección** que se impugna, así como si se objetan los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y, por consecuencia el otorgamiento de las constancias respectivas; **mencionar en forma individualizada** las casillas cuya votación se solicite sea anulada, así como la causal que se invoque en cada una de ellas; **indicar cuál es el error aritmético** que se reclama, esto es el o los rubros que se estimen discordantes y cuyas inconsistencias motiven la anulación de la votación en la casilla; y precisar la conexidad que, en su caso, tenga el asunto con otras impugnaciones.

Además, ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral que, para el análisis de las impugnaciones relacionadas con causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como para la nulidad de una elección, resulta necesario que quien promueva **cumpla con la carga procesal de la afirmación**, o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan.

Así se advierte del contenido de las jurisprudencias **9/2002**⁸ y **28/2016**⁹, emitidas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de rubros **NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL**

⁸ Compilación 1997-2018. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. TEPJF, Volumen 1 Jurisprudencia, páginas 623 y 624.

⁹ Misma obra, páginas 626 y 627.

ESPECÍFICA. y NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES., cuyas razones esenciales se consideran aplicables al caso.

En este orden de ideas, para solicitar el nuevo escrutinio y cómputo de votos en sede jurisdiccional, sea parcial o total, el partido accionante debía exponer en forma clara cuál o cuáles **supuestos de procedencia** se actualizan en el caso concreto, exponiendo los **hechos** en que basara sus afirmaciones y aportando los **elementos de prueba** que las sustentaran, para que este órgano jurisdiccional federal especializado estuviera en posibilidad jurídica de atender su planteamiento y decidir sobre la apertura del incidente respectivo.

Por ello, en el medio de impugnación en que se actúa se considera que no tendría sentido alguno realizar la apertura del incidente respectivo debido a que, al tratarse de manifestaciones genéricas, imprecisas y carentes de elementos probatorios que las respalden, el partido no podría alcanzar su pretensión, lo que daría lugar, incluso, a que en el incidente ni siquiera se revisara si se cumplen o no los supuestos de recuento que prevé la norma.

Lo anterior es acorde con el principio de economía procesal, consistente en que *“debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal.”*¹⁰

De ahí que, con base en las razones expuestas, **se desestime** la solicitud de recuento planteada.

2. Nulidad de votación recibida en casilla

a. Planteamiento

El Partido controvierte la votación recibida en las siguientes casillas.

¹⁰ Véase, Devis Echandía, Hernando, “Teoría General del Proceso”, Editorial Universidad, Argentina, 2004, página 66.



Causales de nulidad de votación recibida en casilla Artículo 75 de la Ley de Medios												
	Casilla	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
1.	4913 B1						X					X
2.	4913 C1						X					X
3.	4914 B1						X					X
4.	4914 C1						X					X
5.	4915 B1						X					X
6.	4915 C1						X					X
7.	4916 B1						X					X
8.	4916 C1						X					X
9.	4917 B1						X					X
10.	4918 B1						X					X
11.	4918 C1						X					X
12.	4919 B1						X					X
13.	4920 B1						X					X
14.	4920 C1						X					X
15.	4921 C1						X					X
16.	4922 B1						X					X
17.	4923 B1						X					X
18.	4923 C1						X					X
19.	4924 B1						X					X
20.	4924 C1						X					X
21.	4925 B1						X					X
22.	4926 B1						X					X
23.	4927 B1						X					X
24.	4929 B1						X					X
25.	4930 B1						X					X
26.	4931 B1						X					X
27.	4932 B1						X					X
28.	4933 B1						X					X
29.	4933 C1						X					X
30.	4934 B1						X					X
31.	5009 B1						X					X
32.	5013 B1						X					X
33.	5014 B1						X					X
34.	5016 C1						X					X
35.	5017 B1						X					X
36.	5017 C1						X					X
37.	5018 B1						X					X
38.	5021 B1						X					X
39.	5022 C1						X					X
40.	5023 B1						X					X
41.	5025 B1						X					X
42.	5026 B1						X					X

Causales de nulidad de votación recibida en casilla Artículo 75 de la Ley de Medios												
	Casilla	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
43.	5030 C1						X					X
44.	5032 C1						X					X
45.	5033 B1						X					X
46.	5034 B1						X					X
47.	5035 C1						X					X
48.	5039 B1						X					X
49.	5040 B1						X					X
50.	5041 B1						X					X
51.	5042 C1						X					X
52.	5042 C2						X					X
53.	5043 B1						X					X
54.	5043 C2						X					X
55.	5044 C2						X					X
56.	5045 C2						X					X
57.	5047 C1						X					X
58.	5048 B1						X					X
59.	5048 C1						X					X
60.	5051 B1						X					X
61.	4934 C1						X					X
62.	4935 B1						X					X
63.	4935 C1						X					X
64.	4936 B1						X					X
65.	4937 B1						X					X
66.	4937 C1						X					X
67.	4938 B1						X					X
68.	4938 C1						X					X
69.	4939 B1						X					X
70.	4939 C1						X					X
71.	4940 B1						X					X
72.	4941 B1						X					X
73.	4942 B1						X					X
74.	4944 B1						X					X
75.	4944 C1						X					X
76.	4946 B1						X					X
77.	4946 C1						X					X
78.	4947 B1						X					X
79.	4950 B1						X					X
80.	4952 B1						X					X
81.	4953 B1						X					X
82.	4954 B1						X					X
83.	4955 C1						X					X
84.	4957 C1						X					X
85.	4958 B1						X					X
86.	4959 C2						X					X
87.	4962 B1						X					X
88.	4962 C1						X					X
89.	4963 B1						X					X
90.	4963 C1						X					X



Causales de nulidad de votación recibida en casilla Artículo 75 de la Ley de Medios												
	Casilla	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
91.	5051 C1						X					X
92.	5051 C2						X					X
93.	5052 B1						X					X
94.	5054 C1						X					X
95.	5055 B1						X					X
96.	5056 B1						X					X
97.	5057 C1						X					X
98.	5062 B1						X					X
99.	5062 C1						X					X
100.	5063 C2						X					X
101.	5064 B1						X					X
102.	5064 C1						X					X
103.	5064 C2						X					X
104.	5067 B1						X					X
105.	5067 C1						X					X
106.	5068 B1						X					X
107.	5070 B1						X					X
108.	5070 C1						X					X
109.	5071 C1						X					X
110.	5071 C2						X					X
111.	5072 C2						X					X
112.	5073 C1						X					X
113.	5074 C1						X					X
114.	5075 B1						X					X
115.	5075 C1						X					X
116.	5077 B1						X					X
117.	5078 B1						X					X
118.	5078 C1						X					X
119.	5079 B1						X					X
120.	5079 C1						X					X
121.	5080 B1						X					X
122.	5081 B1						X					X
123.	5082 B1						X					X
124.	5082 C1						X					X
125.	5083 B1						X					X
126.	5083 C1						X					X
127.	5086 B1						X					X
128.	5086 C1						X					X
129.	5089 B1						X					X
130.	5090 B1						X					X
131.	5090 C1						X					X
132.	5098 B1						X					X

Causales de nulidad de votación recibida en casilla Artículo 75 de la Ley de Medios												
	Casilla	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
133.	5100 B1						X					X
134.	5101 B1						X					X
135.	5103 B1						X					X
136.	5103 C1						X					X
137.	5104 C5						X					X
138.	5104 C6						X					X
139.	5105 C2						X					X
140.	5107 C5						X					X
141.	5116 B1						X					X
142.	5117 B1						X					X
143.	5117 C2						X					X
144.	5119 B1						X					X
145.	5119 C2						X					X
146.	5121 C1						X					X
147.	5124 C1						X					X
148.	5125 B1						X					X
149.	5126 B1						X					X
150.	5126 C1						X					X
151.	5129 B1						X					X
152.	5130 B1						X					X
153.	5130 C1						X					X
154.	5131 C1						X					X
155.	5135 B1						X					X
156.	5135 C1						X					X
157.	5137 B1						X					X
158.	5137 C1						X					X
159.	5138 B1						X					X
160.	5138 C3						X					X
161.	5140 C2						X					X
162.	5141 B1						X					X
163.	5141 C1						X					X
164.	5142 C2						X					X
165.	5143 C1						X					X
166.	5144 C1						X					X
167.	5144 C2						X					X
168.	5144 C3						X					X
169.	5146 B1						X					X
170.	5146 C1						X					X
171.	5147 C1						X					X
172.	5150 B1						X					X
173.	5150 C1						X					X
174.	5151 B1						X					X
175.	5151 C2						X					X
176.	5152 B1						X					X
177.	5152 C2						X					X
178.	5155 B1						X					X
179.	5155 C1						X					X
180.	5155 C2						X					X



Causales de nulidad de votación recibida en casilla Artículo 75 de la Ley de Medios												
	Casilla	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
181.	5156 B1						X					X
182.	5156 C1						X					X
183.	5157 C5						X					X
184.	5158 C1						X					X
185.	5159 B1						X					X
186.	5159 C1						X					X
187.	5160 B1						X					X
188.	5160 C1						X					X
189.	5161 B1						X					X
190.	5161 C1						X					X
191.	5162 B1						X					X
192.	5162 C2						X					X
193.	5163 B1						X					X
194.	5164 B1						X					X
195.	5164 C1						X					X
196.	5165 B1						X					X
197.	5165 C1						X					X
198.	5166 B1						X					X
199.	5166 C1						X					X
200.	5167 B1						X					X
201.	5168 B1						X					X
202.	5168 C1						X					X
203.	5169 B1						X					X
204.	5169 C1						X					X
205.	5170 B1						X					X
206.	5170 C1						X					X
207.	5171 B1						X					X
208.	5171 C1						X					X
209.	5172 B1						X					X
210.	5172 C1						X					X
211.	5173 B1						X					X
212.	5174 B1						X					X
213.	5174 C1						X					X
214.	5175 B1						X					X
215.	5175 C1						X					X
216.	5177 B1						X					X
217.	5177 C1						X					X
218.	5178 B1						X					X
219.	5179 B1						X					X
220.	5180 B1						X					X
221.	5180 C1						X					X
222.	5181 B1						X					X

Causales de nulidad de votación recibida en casilla Artículo 75 de la Ley de Medios												
	Casilla	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)
223.	5181 C1						X					X
224.	4964 B1						X					X
225.	4964 C1						X					X
226.	4965 B1						X					X
227.	4965 C1						X					X
228.	4966 B1						X					X
229.	4966 C1						X					X
230.	4967 B1						X					X
231.	4968 B1						X					X
232.	4968 C1						X					X
233.	4969 B1						X					X
234.	4969 C1						X					X
235.	4970 B1						X					X
236.	4970 C1						X					X
237.	4970 C2						X					X
238.	4970 C3						X					X
239.	4971 B1						X					X
240.	4971 C1						X					X
241.	4978 C1						X					X
242.	4979 B1						X					X
243.	4980 B1						X					X
244.	4982 B1						X					X
245.	4983 B1						X					X
246.	4984 B1						X					X
247.	4985 B1						X					X
248.	4985 C1						X					X
249.	4987 B1						X					X
250.	4995 B1						X					X
251.	4997 B1						X					X
252.	5003 B1						X					X
253.	5007 B1						X					X
Total												

Al respecto, señala, en esencia, lo siguiente.

- **Recepción de la votación por personas distintas a las autorizadas para ello (artículo 75 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios).** Sostiene que, de la revisión de las actas de jornada electoral, así como de las actas de escrutinio y cómputo, se podrá apreciar que las personas funcionarias de casilla no resultan ser las mismas que las que fueron designadas por la autoridad electoral.



- **Haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos (artículo 75 párrafo 1 inciso f) de la Ley de Medios).** Solicita la nulidad de la votación recibida en las referidas mesas directivas de casilla, así como la recomposición del cómputo.
- **Existir irregularidades graves no reparables que pongan en duda la certeza en la votación recibida en casilla (artículo 75 párrafo 1 inciso j) de la Ley de Medios).** Precisa que “llama poderosamente la atención que en estas casillas, FUERZA POR MÉXICO haya obtenido CERO VOTOS o en su caso, un número muy menor de no más de tres votos o hasta cinco, cuando los votos nulos son mucho mayores de forma sustancial”.

b. Estudio

Los agravios en estudio son **inoperantes**, puesto que se trata de planteamientos genéricos, al no aportar elementos mínimos que permitan a este órgano jurisdiccional el análisis en lo particular de la posible nulidad de las casillas motivo de controversia. Se explica.

El actor en su demanda presenta un cuadro en el cual enlista doscientas cincuenta y tres casillas, las cuales, como se señaló en la síntesis del agravio, marca con una “X”, que se actualiza la causa de nulidad prevista por el párrafo 1 incisos f) y k) del artículo 75 de la Ley de Medios.

Sin embargo, presenta a manera de agravios, **expresiones genéricas** aduciendo que se actualizaron diversas causales de nulidad en las casillas instaladas en el distrito; pero **no especifica hechos particulares** que hayan ocurrido en las mismas, ni evidencia de manera específica, en cada caso, con cuáles elementos de prueba (de aquellos levantados en los centros de votación) pretende

demostrar las presuntas irregularidades que aduce.

En ese sentido, sus agravios son **inoperantes**, por las razones que se exponen a continuación:

I. Marco jurídico de la exigencia mínima en la formulación de agravios, en los juicios de inconformidad en los cuales se hacen valer causales de nulidad de casillas.

Ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla, solo puede actualizarse tratándose de conductas calificadas como graves¹¹, y cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación; siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación.

Lo anterior, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceras personas, en este caso, **el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría del electorado que expresó válidamente su voto**, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanas y ciudadanos escogidos al azar y personas que, después de ser capacitadas, son seleccionadas como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla.

Esta interpretación está construida sobre la base de proteger el valor del voto que se emite en una elección; y se encuentra recogida en la jurisprudencia **9/98**¹², bajo el rubro **PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.**

¹¹ Véase la Jurisprudencia **20/2004** de rubro **SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES**, consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, TEPJF, página 303.

¹² Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.



Atendiendo a lo anterior, el artículo 9 párrafo 1 inciso e) de la Ley de Medios, prevé una exigencia mínima que debe cumplirse en la presentación de demandas en la materia, señalando que se debe mencionar **de manera expresa y clara** los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que cause el acto o resolución impugnado.

Por su parte, el artículo 52 de la misma Ley, prevé requisitos especiales del escrito de demanda del juicio de inconformidad, y existe una amplia construcción jurisprudencial en la que se ha establecido que, en esta clase de juicios, no solamente se debe hacer mención de las casillas que se impugnan, **sino la expresión en forma clara y precisa de cuáles fueron las irregularidades que se afirma existieron en cada una de ellas**, de conformidad con los supuestos establecidos en las causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75 de la Ley de Medios.

En ese contexto, se ha sostenido también que **los presupuestos de nulidad no quedan colmados con la mera expresión y mención de los supuestos normativos de las causales en las que se invoca la actualización de alguna irregularidad**, ya que quien promueve debe aportar elementos que permitan a quien juzga tener certeza de los hechos que se quieren demostrar -o al menos indicios de que dicha situación aconteció- **así como precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron**.

Esta exigencia se basa en la necesidad de que la parte actora exponga a la autoridad juzgadora, a través de sus afirmaciones, las circunstancias que constituyan **la causa de pedir de su pretensión, esto es, los hechos concretos que sustentan su petición**.

SCM-JIN-93/2021

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se encuentra en la jurisprudencia 9/2002¹³ de la Sala Superior, de rubro **NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA, DEBE IDENTIFICARSE LA QUE SE IMPUGNA, ASÍ COMO LA CAUSAL ESPECÍFICA.**

La referida jurisprudencia, resulta obligatoria para esta Sala Regional en términos de lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en la misma, se sostiene que es a quien demanda a quien le compete cumplir, indefectiblemente, con la carga procesal de la afirmación, o sea, con la mención particularizada que debe hacer en su demanda, de las casillas cuya votación solicita se anule y la causal de nulidad que se dé en cada una de ellas, **exponiendo, desde luego, los hechos que la motivan.**

Lo anterior, pues **no basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que el día de la jornada electoral hubo irregularidades en las casillas, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal**, la cual reviste mayor importancia, porque, además de que al cumplirla da a conocer al órgano juzgador su pretensión concreta, permite a quienes figuran como su contraparte —la autoridad responsable y las personas terceras interesadas—, que en el asunto sometido a la autoridad jurisdiccional, acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga.

Señala también que, si quien demanda omite narrar los eventos en que descansan sus pretensiones, falta la materia misma de la prueba, pues malamente se permitiría que a través de los medios de convicción se dieran a conocer hechos no aducidos, integradores de causales de nulidad **no argüidas de manera clara y precisa.**

Así, la jurisprudencia señalada concluye que, ante la conducta omisa o deficiente observada por quien reclama, no podría permitirse que la jurisdicente abordara el examen de causales de nulidad no hechas valer como lo marca la ley; y que, aceptar lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al órgano resolutor el dictado de una sentencia

¹³ Consultable en Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 45 y 46.



que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial.

No pasa desapercibido para esta Sala Regional que el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios, dispone que, al resolver los medios de impugnación establecidos en la citada ley, la Sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Sin embargo, la Sala Superior también ha interpretado los alcances de la suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de inconformidad en que se haga valer la nulidad de la votación recibida en casillas, en la tesis relevante **CXXXVIII/2002**¹⁴ bajo el rubro **SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.**

En la referida tesis, este Tribunal Electoral ha sostenido que la omisión de identificar las causales de nulidad en los escritos de demanda de inconformidad, no pueden ser estudiadas de oficio por la autoridad que conoce del juicio, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente; cosa totalmente ilegal, **a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación.**

II. Análisis específico de las causales de nulidad invocadas.

A continuación, se realizará el estudio específico de cada una de las causales de nulidad de votación en casilla invocadas por el actor en su demanda; agravios que, como se anticipó resultan **inoperantes**.

¹⁴ Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 203 y 204.

1. Causal de nulidad contenida en el inciso e) consistente en que la votación sea recibida por personas u órganos distintos a los facultados para ello.

En su demanda el actor refiere que, en las casillas que señala se identificó que la recepción de la votación se verificó por personas distintas a las facultadas por la legislación electoral y que no se encuentran domiciliadas en la sección electoral en la que actuaron como personas funcionarias o bien militan en algún partido político, y solicita que esta Sala Regional identifique quiénes eran las personas autorizadas.

De igual forma, el partido solicita que se pidan las actas de las casillas, de las que se podrán observar las irregularidades que cita y el cambio en las personas funcionarias; indica que los documentos de la casilla deben ser cotejados con el listado nominal de cada mesa receptora.

En esta causal de nulidad, los agravios que hace valer el promovente son **inoperantes**, porque solamente señala en la tabla plasmada al inicio de su demanda las casillas en las cuales, en su consideración, se actualizaba la causal de nulidad, pero dejó de proporcionar algún dato adicional mínimo que hiciera viable el estudio de los supuestos de la causal que invoca en este apartado.

Al respecto, debe señalarse que la Sala Superior de este Tribunal, en la resolución del recurso de reconsideración **SUP-REC-893/2018**, sostuvo que al analizar esta causal resultan **inoperantes** los agravios en los que se solicita la nulidad de la votación de casilla por recibirse la votación por personas u órganos distintos a los facultados cuando **la parte actora omite proporcionar algún elemento mínimo, como la casilla y el nombre completo de la persona cuya actuación se cuestiona.**

Al respecto, la Sala Superior razonó que debe evitarse que a través de argumentos genéricos y sin sustento se permita que quienes promueven, trasladen a los órganos jurisdiccionales la carga relativa



a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

En esa tesitura, la Sala Superior también expuso que, de otra forma, la parte actora podrían afirmar que todas las casillas de una elección se integraron por presidencias, secretarías y personas escrutadoras que no estaban facultadas legalmente para ello, y el tribunal respectivo tendría la obligación de: **a)** revisar las actas de escrutinio y cómputo y de jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; **b)** corroborar si esas personas aparecen en los respectivos encartes.

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

De ahí que para que se analice la causal de nulidad prevista en el inciso e) del artículo 75 de la Ley de Medios, es necesario que se provean elementos mínimos indispensables para que el órgano jurisdiccional detecte los casos que son tildados de irregulares y con base en esto, proceda al estudio de los supuestos de nulidad.

En ese sentido, en su demanda el promovente solamente marcó **las casillas** en las cuales consideraba que se actualizaba la referida causal de nulidad, pero al describir sus motivos de disenso se limitó a enunciar los supuestos descritos en la Ley Electoral, sin proporcionar los elementos mínimos para estar en condiciones de identificar a las personas funcionarias que supuestamente integraron de manera indebida las casillas.

En tal virtud, el marco normativo que invoca el promovente no es cuestión relevante para proceder al estudio de los motivos de disenso, ya que no le releva de proporcionar datos sobre las casillas cuya

validez cuestiona, como podría ser el nombre de las personas que desde su perspectiva, no estaban autorizadas para integrar las mesas receptoras.

Lo anterior, porque si bien la Ley Electoral prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, en estos casos, la Sala Superior de este Tribunal¹⁵ ha sostenido que **no siempre procede la nulidad de la votación**, tal como se indica en la Jurisprudencia 14/2002¹⁶, de rubro **SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS PROPIETARIOS DE CASILLA POR LOS SUPLENTE GENERALES PREVIAMENTE DESIGNADOS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL. CUÁNDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)**.

De ahí que si el partido actor se limitó a enunciar los supuestos previstos en la Ley Electoral sin mencionar en cada casilla quiénes no debieron recibir la votación, sus argumentos sean ineficaces para demostrar la existencia de irregularidades, al ser importante que en la demanda se precisen los elementos mínimos para estar en condiciones de analizar adecuadamente las irregularidades planteadas.

De ahí la **inoperancia** de sus agravios.

2. Causal de nulidad contenida en el inciso f) consistente en que haya mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

El actor señala que, en las casillas que identifica en la tabla inicial de su demanda, se actualiza la presencia de error y dolo en el cómputo de los votos, al haber discrepancias entre las cifras de las propias actas de escrutinio y cómputo, porque no coinciden el total de votos obtenidos en la urna, la sumatoria de los votos consignados a cada partido político, candidaturas comunes y nulos, ni el total de personas

¹⁵ Véase SUP-REC-893/2018.

¹⁶ Consultable en Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 68 y 69.



electoras que votaron en una cantidad mayor a la diferencia existente entre el primer y segundo lugar, por lo que solicita la nulidad.

A efecto de evidenciar lo anterior, el promovente puntualiza que sus asertos se demuestran mediante las actas de escrutinio y cómputo, cuyo análisis “dejará ver la presencia de errores que sistemáticamente configuran la causal de nulidad” en cita, además de citar diversas jurisprudencias, tales como: “ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PAR EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Legislación del Estado de Zacatecas y similares” y “ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”.

No obstante las jurisprudencias que invoca el promovente y con independencia de sus asertos, los motivos de disenso son **inoperantes**, porque no evidencian en concreto, cuáles son los errores susceptibles de actualizar la nulidad de la votación recibida en las casillas que indica en su esquema inicial. Se explica.

La Sala Superior en la jurisprudencia 28/2016¹⁷ de rubro **NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. PARA ACREDITAR EL ERROR EN EL CÓMPUTO, SE DEBEN PRECISAR LOS RUBROS DISCORDANTES** sostuvo que dicha causal de nulidad, por error en el cómputo, se acredita cuando en los rubros fundamentales: **1)** la suma del total de personas que votaron; **2)** total de boletas extraídas de la urna; y, **3)** el total de los resultados de la votación, existen

¹⁷ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJFn, Año 9, Número 19, 2016, páginas 25, 26 y 27.

SCM-JIN-93/2021

irregularidades o discrepancias que permitan derivar que no hay congruencia en los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo, en virtud de que dichos rubros se encuentran estrechamente vinculados por la congruencia y racionalidad que debe existir entre ellos, pues en condiciones normales el número de personas electoras que acude a sufragar en una determinada casilla, debe ser igual al número de votos emitidos en ésta y al número de votos extraídos de la urna.

Bajo ese contexto, la Sala Superior indicó que para que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al respecto, es necesario **que quien promovente el juicio identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias, y que a través de su confronta, hacen evidente el error en el cómputo de la votación.**

Dicho de otra manera, el primer elemento, o sea, el error, se actualiza cuando hay incongruencia entre los rubros fundamentales; mientras que el segundo, la determinancia, tiene efectos en la medida en que la irregularidad numérica, o sea dicha incongruencia, resulte mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar (determinancia cuantitativa)¹⁸.

Bajo esa tesitura, para que el órgano jurisdiccional electoral analice la causal de nulidad en estudio es necesario que se indique en forma específica -no genérica- en dónde se detectaron los errores que pueden viciar la votación recibida en las casillas.

Así, es necesario que el promovente **identifique los rubros en los que afirma existen discrepancias ya que a través de su confronta debe hacerse evidente el error en el cómputo de la votación**¹⁹, ya que en caso contrario la casilla no podrá ser objeto de análisis.

¹⁸ Conforme al criterio contenido en la jurisprudencia **10/2001**, de rubro **ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUÁNDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SIMILARES)**. Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 5, año dos mil dos, páginas 14 y 15.

¹⁹ Véanse las jurisprudencias **16/2002**, de rubro **ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SU VALOR PROBATORIO DISMINUYE EN PROPORCIÓN A LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS DISCORDANTES O FALTANTES**, así como **8/1997** de rubro **ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL**



Esto es así, porque no en todos los casos los aparentes errores o datos en blanco de las actas de escrutinio y cómputo son, por sí mismas, circunstancias suficientes para anular la votación recibida en una casilla, por lo que debe evidenciarse en cada caso, por qué las inconsistencias pueden dar lugar a la máxima sanción electoral.

Incluso, - y de ser el caso-, debe señalarse si las casillas fueron objeto de recuento e identificar de qué manera subsiste algún error o se generó alguno nuevo al asentar los datos de recuento, lo que tampoco pormenoriza el promovente.

En ese sentido, pretender que se analicen en forma oficiosa las irregularidades en cada casilla que invoca y en las que fue omiso en exponer algún principio de agravio llevaría a que este órgano jurisdiccional supla en forma total las presuntas inconformidades que el actor dejó de esgrimir en su demanda.

Se afirma lo anterior, porque en cada caso, el actor solamente señala que existieron votos computados “de manera irregular” y que hay discrepancias entre las cifras, así como entre el número de votos extraídos de la urna.

Señala también, que la sumatoria de votos y el total de personas electoras en una proporción superior a la diferencia de votos entre el primer y segundo lugares, lo que, según su dicho, puede ser verificado en las actas correspondientes, sin embargo, no evidencia los errores o inconsistencias en la computación de los votos, de manera particularizada en ninguna de las mesas receptoras que insertó en su esquema inicial.

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Visibles respectivamente en Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 6 y 7 y Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 1, Año mil novecientos noventa y siete, páginas 22 a 24.

Tampoco precisa en las casillas que enlista cuáles son los rubros esenciales que no muestran coincidencia, ni reseña siquiera en forma somera en cada caso, por qué los aparentes errores en las casillas que enuncia podrían ser determinantes para modificar el resultado de la votación obtenida en cada una de las mesas receptoras, lo que era necesario para analizar el supuesto contenido en el artículo 75 párrafo 1 fracción f) de la Ley de Medios.

En esa tesitura, el partido actor pretende que se analicen las actas para desprender su principio de agravio, sin embargo, tales circunstancias debía hacerlas valer en su demanda.

De ahí la inoperancia de sus agravios, pues a juicio de esta Sala Regional no es dable acoger su pretensión de analizar las casillas que señala.

3. Causal de nulidad contenida en el inciso k) consistente en que haya existido irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

De igual forma, el partido indica que se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 75 inciso k) de la Ley de Medios, consistente en la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditadas, que ponen en duda la certeza de la votación recibida en casilla. Lo anterior, puesto que, a su decir, llama la atención que en diversas casillas haya obtenido cero votos o muy pocos, cuando los votos nulos son mayores.

No obstante, esta manifestación resulta **inoperante** para analizar dicha causal, ya que en modo alguno se precisan circunstancias de tiempo, modo y lugar que hagan visible que existieron anomalías susceptibles de trascender al resultado obtenido en las mesas receptoras.



Lo anterior, puesto que el hecho de que haya recibido muy pocos o ningún voto en diversas casillas, en modo alguno constituye una irregularidad grave, máxime que el Partido no señala datos precisos de irregularidades específicas en las actas respectivas, ni mucho menos acredita que tal situación haya sido producto de una anomalía durante la jornada electoral o en el cómputo que pongan en duda la certeza de la votación.

Esto es así, porque en la jurisprudencia 20/2004²⁰, de rubro **SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES** se expuso que el sistema de nulidades de los actos electorales, solo están comprendidas determinadas conductas, de las cuales se exige, tácita o expresamente, y de manera invariable, que sean graves, y a la vez que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran, por lo que en este caso la anomalía debe demostrarse en forma fehaciente.

A su vez, en la tesis XLI/97²¹, de rubro **NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ)** se ha señalado que para que se surta este último extremo de la llamada causal genérica de nulidad, basta con que en autos se demuestre fehacientemente que se han vulnerado principios rectores de la función electoral.

De ahí que una manifestación genérica sobre un cúmulo de irregularidades que según el partido actor se acreditan, no podría acarrear en sí misma el estudio oficioso de irregularidades que debían

²⁰ Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, TEPJF, página 303.

²¹ Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 1, Año mil novecientos noventa y siete, páginas 51 y 52.

SCM-JIN-93/2021

hacerse patentes en la demanda y ser corroboradas a través de los medios probatorios pertinentes, los que, en el caso, no allegó el promovente.

Ahora bien, precisados los análisis de cada una de las causales hechas valer por el Partido, debe señalarse que, como se ha desarrollado, la Sala Superior en la tesis relevante CXXXVIII/2002²², de rubro **SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA** sostuvo expresamente que el órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, **en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir.**

Esto, porque tal como se establece en el artículo 52 párrafo 1 inciso c) de la Ley de Medios, es un requisito especial del escrito de demanda que se mencione, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas.

En ese contexto, la Sala Superior apuntó que, si la parte que promueve es omisa en señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada de oficio, porque tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente.

De ahí que, en el presente caso, los motivos de disenso sean en conjunto, ineficaces para acceder a su pretensión total, ya que las citas genéricas de las causales de nulidad y la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar en cada mesa receptora impugnada no permiten verificar la actualización de los supuestos previstos en el artículo 75 de la Ley de Medios.

²² Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 6, Año dos mil tres, páginas 203 y 204.



Esto, (porque tal como lo sostuvo la Sala Superior en la tesis recién citada) implicaría que el órgano jurisdiccional asumiera el rol de promovente, al realizar una suplencia total de la queja deficiente y calificando después esos mismos agravios, siendo juez o jueza y parte.

Por último, al haberse tenido como inoperantes los planteamientos de nulidad de la votación recibida en casilla, debe desestimarse la solicitud de nulidad de la elección, puesto que ésta, el Partido la hace depender de que se acreditaran tales irregularidades. Por tanto, no se actualiza ninguno de los supuestos previsto por el artículo 76 párrafo 1 de la Ley de Medios.

3. Violación de principios constitucionales

a. Planteamiento

El Partido solicita la nulidad de la elección distrital impugnada, por la vulneración grave a los principios constitucionales debido a que, durante el periodo de veda electoral, diversas personas, con calidad de figuras públicas, deportistas, modelos, comediantes, entre otras personas con trascendencia social (denominadas “*influencers*”) emitieron mensajes de apoyo en favor del PVEM, lo cual, a su juicio, vulneró el principio de equidad debido a que los demás institutos políticos sí se ciñeron a las reglas de participación en el proceso electoral de ahí que las irregularidades realizadas por el PVEM generaron una indebida ventaja para buscar un posicionamiento ilegítimo ante el electorado.

Asimismo, sostiene que la violación a la veda electoral por parte del PVEM aconteció también en procesos electorales pasados, por lo que

SCM-JIN-93/2021

existe una gravedad especial en la conducta en detrimento del resto de partidos políticos que participaron en la contienda electoral.

Al respecto, menciona que no solo se debe tomar en cuenta las personas que difundieron este tipo de apoyos; es decir las y los *influencers*, sino que ello trascendió a un número exponencial debido al total de personas seguidoras que tiene cada una de las cuentas aludidas; por lo que existe una alta probabilidad de que esas publicaciones no quedaron en la emisión del mensaje, lo que revela una violación al principio de equidad en la contienda electoral.

Por otro lado, refiere que la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que existe un riesgo exponencial en mensajes difundidos en una red social por parte de personas que ostentan cierta relevancia pública, por ello, sostiene que los mensajes difundidos revelan una multiplicidad de elementos comunes entre sí que permiten desvirtuar la presunción de espontaneidad y, por el contrario, demuestran que se trató de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar al PVEM, ello con independencia de que las y los *influencers* hubieran recibido un pago.

Por tanto, el partido promovente refiere que el PVEM cometió una infracción durante el periodo de veda electoral, etapa en la que hay una prohibición de que los partidos políticos y candidaturas realicen actos de propaganda; por lo que considera que debe declararse la nulidad de la elección.

Por otro lado refiere que, de declararse fundados sus agravios, se actualizarían los supuestos legales para que esta Sala Regional determine la nulidad de la elección; aspecto que, en concepto de este órgano jurisdiccional, se podría ubicar dentro del supuesto previsto en los artículos 78 y 78 bis de la Ley de Medios.

En virtud de lo anterior, los agravios se analizará a la luz de las referidas causales de nulidad.



b. Estudio

Este órgano jurisdiccional estima que los motivos de disenso del Partido son **inoperantes** pues no se encuentran debidamente acreditados los elementos de las causales de nulidad, de tal manera que quedara demostrada la afectación al principio de equidad en la elección y el grado en que eso pudo influir en los resultados; según lo que enseguida se explica.

I. **Marco Convencional, Constitucional y legal respecto a los principios que deben regir en toda elección democrática.**

Este Tribunal Electoral ha sostenido²³ que la declaración de validez o nulidad de una elección, según corresponda, se debe hacer con base en el bloque de constitucionalidad y de legalidad e incluso de convencionalidad aplicable en el caso concreto.

Asimismo, existen múltiples principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral que son de observancia obligatoria, por ejemplo, la equidad en la competencia entre los partidos políticos, y el principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo la ley puede establecer causales de nulidad.

El señalado principio de equidad se encuentra tutelado en el artículo 134, en relación con el 41 de la Constitución, tanto en la dimensión de competencia entre partidos políticos, como en la posibilidad de contar, de manera equitativa, con los instrumentos que permitan a los institutos políticos llevar a cabo sus actividades, por ejemplo, en el acceso a financiamiento público.

²³ Al resolver, por ejemplo, el recurso de clave SUP-REC-492/2015.

Aunado a lo anterior, de los citados preceptos normativos se desprende que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo debe llevarse a cabo a través de elecciones que sean libres, auténticas y periódicas, bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad²⁴.

Así, se deben destacar los siguientes principios y valores constitucionales, característicos de la materia electoral, en un Estado de Derecho Democrático, que han sido citados por la Sala Superior²⁵:

- Los derechos fundamentales de votar, ser votado o votada, de asociación y de afiliación, en cuanto tienen la estructura de principios.
- El derecho de acceso para la ciudadanía, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del Estado.
- El principio de elecciones libres, auténticas y periódicas.
- El sufragio universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible y auténtico.
- La maximización de la libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que debe preceder a las elecciones.
- El principio conforme al cual los partidos políticos nacionales deben contar, de manera equitativa, con elementos adecuados para llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes; de campaña y otras específicas.
- La equidad en el financiamiento público; la prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado.
- Los principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad y profesionalismo.

²⁴ Véase sentencia emitida en el juicio SUP-JRC-391/2017.

²⁵ Véase sentencia emitida en el juicio SUP-REC-868/2015 y acumulados.



- La presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; el de la tutela judicial efectiva en materia electoral.
- La definitividad de actos, resoluciones y etapas, en materia electoral; la equidad en la competencia entre los partidos políticos y candidatas y candidatos independientes.
- El principio de reserva de ley en materia de nulidades de elecciones, conforme al cual sólo en la ley se deben de establecer las causas de nulidad del voto, de la votación recibida en las mesas directiva de casilla y de la elección en su conjunto.

Los anteriores principios rigen la materia electoral y, por ende, constituyen los elementos y características fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección sea considerada constitucional y legalmente válida.

Sirve de respaldo argumentativo a lo anterior la tesis **X/2001**²⁶ sustentada por la Sala Superior, de rubro **ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.**

Ahora bien, por lo que al caso concreto interesa, debe resaltarse que este Tribunal Electoral ha sostenido²⁷ que la restricción a la propaganda el día de la jornada electoral y durante los tres días

²⁶ Consultable en Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64.

²⁷ El artículo 251 de la Ley electoral el cual establece que “*el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.*” Al respecto, la Sala Superior, ha establecido que el objeto del mismo es facilitar el establecimiento de condiciones suficientes para que, en ausencia de la campaña electorales de los partidos políticos en forma invariable se garantice al ciudadano un espacio para reflexionar o madurar en forma objetiva el sentido de su voto, mediante la ausencia del asedio de las reuniones públicas, asambleas, marchas, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones de los partidos políticos. Véase la sentencia dictada en el recurso de reconsideración SUP-REC-42/2003.

SCM-JIN-93/2021

anteriores -veda electoral-, específicamente, cuando su ejercicio tenga como propósito la difusión de contenidos electorales en el referido periodo, tiene como fin que la renovación de los cargos de elección popular se realice **mediante elecciones libres, auténticas y periódicas**; y que el voto de la ciudadanía se dé libremente sin recibir algún tipo de presión; es decir, observar principios constitucionales a los que se ha aludido previamente.

Con base en lo expuesto, se ha considerado que los órganos jurisdiccionales, locales y federales, en materia electoral, tienen la atribución de reconocer la validez o declarar la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que quienes los impugnen hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar que **están plenamente acreditadas** las causales de nulidad constitucional o legalmente previstas o, **incluso, irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas, que resulten determinantes para la validez de la elección o que transgreden los principios constitucionales.**

Esto es, si se dan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral sean contrarias a una disposición constitucional, convencional o legal, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante al procedimiento electoral atinente o a su resultado, podría conducir a la declaración de invalidez de la elección, por ser contraria a los principios o preceptos de la Constitución, de los tratados internacionales o de la legislación aplicable.

II. Marco Convencional, Constitucional y legal relativo a los principios y reglas que rigen el sistema de nulidades.

De inicio, es pertinente establecer el marco normativo prescrito en la base VI del artículo 41 de la Constitución, así como los artículos 78 y 78 bis de la Ley de Medios, respecto a las irregularidades graves que implican una violación a los principios que rigen la materia electoral y que pueden traer aparejada la nulidad de la elección.



El artículo 41 fracción VI de la Constitución, establece las bases generales en materia de nulidades, de las cuales se debe partir, al tratarse de la Norma Suprema en nuestro país.

Dispone que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales se establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales, por **violaciones graves, dolosas y determinantes**, en los siguientes casos:

- a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;
- b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
- c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

En la referida disposición constitucional, se establece también que las mencionadas violaciones **deberán acreditarse de manera objetiva y material**, indicando que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

Además, el artículo 78 de la Ley de Medios establece que las Salas de este Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputaciones o senadurías, cuando se hayan cometido, **en forma generalizada**, violaciones **sustanciales en la jornada electoral, en el distrito** o entidad de que se trate; que éstas se encuentren **plenamente acreditadas** y se demuestre que las mismas **fueron determinantes** para el resultado de la elección, salvo que dichas irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o candidaturas.

Por su parte, el artículo 78 *bis* de la misma Ley dispone que:

- Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones **graves, dolosas y determinantes** en los casos previstos la normativa constitucional referida previamente.
- Dichas violaciones **deberán acreditarse de manera objetiva y material**²⁸.
- Se entenderán por violaciones graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales de la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.
- Se calificarán de dolosas las conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.
- Para efectos de lo dispuesto en la base VI del artículo 41 constitucional, se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía y no de un ejercicio periodístico²⁹.

De esta manera, los elementos o condiciones para la declaración de invalidez de una elección, por violación a los principios o preceptos constitucionales son:

- a) Que **existan hechos** que se consideren violatorios de algún principio o norma constitucional o precepto de los Tratados tuteladores de los derechos humanos e incluso de la ley

²⁸ De nuevo señalando que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

²⁹ Al respecto, el propio artículo 78 *bis* de la Ley de Medios, establece la salvedad relativa a que, con el fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y con el objetivo de fortalecer el estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato que sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien la emite.



- reglamentaria, que sea aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves).
- b) Que las violaciones sustanciales o irregularidades graves deben estar **plenamente acreditadas**.
 - c) Que se constate el **grado de afectación** en el proceso electoral que haya ocasionado la violación al principio, norma constitucional o precepto convencional protector de derechos humanos aplicable.
 - d) Que las violaciones o irregularidades sean, cualitativa y/o cuantitativamente, **determinantes** para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado de la elección³⁰.

Así, para declarar la nulidad de una elección, es necesario que las violaciones se encuentren debidamente probadas, y además sean irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas y, además, determinantes, de tal forma que trasciendan al normal desarrollo del proceso electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud, cualitativa y/o cuantitativa, que afecte la elección en su unidad o totalidad.

Los requisitos para la declaración de nulidad de una elección permiten garantizar la autenticidad y libertad del sufragio, así como la autenticidad y libertad de la elección misma, además de otorgar certeza respecto de las consecuencias jurídicas de los actos válidamente celebrados.

De ahí que, en cada caso, se deba considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los hechos u actos que se señalan como irregulares.

³⁰ Así lo ha razonado esta Sala Regional al resolver, entre otros el juicio de inconformidad de clave SCM-JIN-16/2018.

SCM-JIN-93/2021

Lo anterior, a fin de que no cualquier acto directa o indirectamente relacionado con temas electorales pueda incidir en el normal desarrollo del proceso comicial, en detrimento de la democracia y de los actos jurídicos celebrados válidamente, mediante una violación que pueda resultar accesoria, leve, aislada, eventual e incluso intrascendente, conforme a la normativa jurídica aplicable y al sistema electoral mexicano³¹.

Esto, en cumplimiento a lo ordenado por la jurisprudencia **9/98**³², bajo el rubro **PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.**

III. Caso concreto.

En el caso, el Partido solicita la nulidad de elección debido a que, a su juicio, se dio una conducta generalizada consistente en la difusión de mensajes de apoyo en favor del PVEM por parte de diversas personas que denomina *influencers*.

Sin embargo, en atención a los elementos descritos previamente y de conformidad con lo que establecen los artículos 9 párrafo 1 inciso f), en relación con el 15 párrafo 2, de la Ley de Medios, corresponde a la parte actora no solamente exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o precepto constitucional o convencional, sino además ofrecer y aportar los elementos de prueba pertinentes y necesarios para acreditar el hecho motivo de la violación constitucional.

En el caso, el actor no acompaña a su demanda algún documento o medio de prueba tendente a demostrar su dicho sobre los mensajes presuntamente difundidos en varias cuentas de redes sociales (Twitter, Instagram, por ejemplo) cuyo cuadro inserta en su escrito. Ni

³¹ Véase la Jurisprudencia **20/2004** de rubro **SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES**, consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, TEPJF, página 303.

³² Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 2, Año 1998, páginas 19 y 20.



siquiera precisa las expresiones o mensajes que atribuye a cada una de las personas que identifica como *influencers*.

En todo caso, hace una enunciación de presuntas cuentas de redes sociales, con un número determinado que identifica como sus personas seguidoras, pero sin aportar un elemento, aun indiciario, de la vinculación de dichas cuentas, lo que las personas titulares de las mismas “*difundieron como influencers*”, así como el contenido o contexto.

Por el contrario, se limita a realizar una narrativa en la demanda sin demostrar plenamente el acontecimiento de tales hechos, la existencia generalizada y la incidencia específica en el distrito cuyos resultados pretende impugnar; sin pruebas adicionales más que su dicho.

Aunque refiere la existencia de los hechos, pretende que sea esta Sala Regional quien de manera oficiosa investigue las manifestaciones que, a su decir, provinieron de las cuentas de las redes sociales que identifica, así como corroborar los datos asentados en ellas, incluso allegarse la existencia de posibles quejas o denuncias, omitiendo con ello cumplir la mínima obligación procesal prevista en el señalado artículo 9 párrafo 1 inciso f) de la Ley de Medios³³ sobre el ofrecimiento de pruebas³⁴.

³³ Que a la letra dispone: 1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

... f) Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley; mencionar, en su caso, las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos; y las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas...

³⁴ Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 9/99 de la Sala Superior, que lleva por rubro **DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. SU FALTA, NO IRROGA PERJUICIO A LAS PARTES, POR SER UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR** consultable en Justicia Electoral. Revista del TEPJF, Suplemento 3, Año 2000, página 14.

SCM-JIN-93/2021

Por otra parte, el actor tampoco ofrece o aporta algún documento con el cual acredite que éstas deban requerirse, porque oportunamente las hubiera solicitado por escrito al órgano competente, y éstas no le fueron entregadas.

En ese sentido, aún en el supuesto de que los presuntos hechos que narra pudieran ser violatorios de algún principio o norma constitucional, en el caso, no se encuentran acreditados los elementos de las causales de nulidad previstas por los artículos 78 y 78 bis de la Ley de Medios, conforme al marco jurídico antes descrito.

Esto pues, por un lado, tales irregularidades no se encuentran **plenamente acreditadas**; y, por otro, no es posible constatar el **grado de afectación** en el proceso electoral y los resultados en el distrito cuyos resultados pretende impugnar, que haya ocasionado la violación al principio, norma constitucional o precepto convencional protector de derechos humanos aplicable.

Lo anterior es así, pues era precisamente ese daño y trascendencia lo que debió ser acreditado con elementos materiales y objetivos, lo que, no acontece en el presente caso.

Es decir, no logra demostrar cómo o de qué grado fue la afectación para influir en los resultados, ya que solo constituye una narrativa sustentada en varias suposiciones hipotéticas sin soporte probatorio³⁵, de ahí la **inoperancia** anunciada.

En consecuencia, ante lo **inoperante** de los agravios lo procedente es **confirmar** los resultados de la elección impugnados.

³⁵ Véase las tesis **XVII.1o.C.T.12 K (10a.)**, de rubro **AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN HIPOTÉTICA**. Localizable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 1889 y la diversa **XVII.1o.C.T. J/6 (10a.)** de rubro **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON LOS QUE SE SUSTENTAN EN SITUACIONES, CONSTANCIAS O PRUEBAS INEXISTENTES EN LOS AUTOS DE LOS QUE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO**. Localizable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 32, julio de 2016, tomo III, página 1827.



Por lo expuesto y fundado esta Sala Regional

RESUELVE

ÚNICO. Se **confirman** los actos impugnados.

NOTIFÍQUESE por correo electrónico al actor, así como a la autoridad responsable, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de la Unión y al Consejo General del INE, en todos los casos con copia certificada de la sentencia y, **por estrados** a las demás personas interesadas, esto con fundamento en los artículos 26 numeral 3; 28, 29 y 60 de la Ley de Medios.

Devuélvase los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos la Magistrada y los Magistrados, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el Acuerdo General **3/2020** de la Sala Superior, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se emitan con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.